

La maldición del Güegüense: Anatomía de la cultura política nicaragüense*

The Curse of Güegüense: Anatomy of Nicaraguan Political Culture

*Gilles Bataillon***

* Traducción del francés de Paula Nathalia Correal Torres.

** Director de Investigaciones en el Centro de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Correo electrónico: gilles.bataillon@ehess.fr.

Resumen

En este artículo se establece una serie de análisis y reflexiones sobre la cultura e instituciones políticas nicaragüenses, tomando como punto de partida el libro *La maldición del Güegüense*, de Moisés Hassan, y se hace una revisión histórica de varios acontecimientos y dinámicas políticas clave que se desarrollaron en el país desde los años setenta. Se argumenta en torno a cómo la revolución en Nicaragua jamás logró ser un punto de inflexión que implicara la destrucción de las antiguas formas de establecer redes de poder y el advenimiento de nuevas dinámicas de auto-organización y relación con el derecho, de modo que, en Nicaragua, la especulación y los acuerdos entre poderosos aparecen como prácticas legitimadas por encima de los dispositivos legales. Desde el fin de su guerra civil en 1990, la transformación política nicaragüense no se ha traducido en el establecimiento de un régimen democrático, sino en la actualización de los mecanismos clientelistas que fueron la base del régimen de la familia Somoza, especialmente bajo el gobierno actual de Daniel Ortega.

Palabras clave: Nicaragua, cultura política, Revolución sandinista, Moisés Hassan.

Abstract

This article presents an series of analysis and considerations on Nicaraguan political culture and institutions, and an historical review of several key political events and dynamics unfolded in the country since the 1970s, taking as a starting point Moisés Hassan's book *La maldición del Güegüense*. It argues on how Nicaraguan revolution never managed to be a turning point that implied the destruction of the old political ways of establishing power networks and failed to bring new dynamics of self-organization and relationship with the law, in such a way that, in Nicaragua, speculation and agreements between the powerful still appear as legitimate practices over and above legal provisions. Since the end of its civil war in 1990, the Nicaraguan political transformation has not resulted in the establishment of a democratic regime, but in the updating of the clientelist mechanisms that were the basis of the Somoza family regime, especially under Daniel Ortega's current government.

Key words: Nicaragua, political culture, nicaraguan revolution, Moisés Hassan.

Introducción

Publicado en 2009 por el aniversario número treinta de la revolución del 19 de julio de 1979, reeditado en 2016 con una versión revisada y corregida, *La maldición del Güegüense* es un libro que seguramente marcará un hito en los testimonios y ensayos sobre la revolución sandinista y sus secuelas. Recordemos los diferentes momentos de esta revolución y sus secuelas, así como de las pasiones que despertó.

Nicaragua experimentó por primera vez una revolución que simbolizó las promesas de una revolución pluralista y no alineada, apoyada a la vez por las raras democracias de América Latina de la época — Venezuela y Costa Rica, los Estados Unidos de Jimmy Carter y Europa—, pero también por los gobiernos autoritarios y nacionalistas latinoamericanos como México y Panamá, y por Cuba, Libia, Irán y los grandes países del mundo comunista. En enero de 1978, con el asesinato del periodista de oposición, Pedro Joaquín Chamorro, la unión de todas las fuerzas de oposición, de la burguesía empresarial a los sectores populares y de los guerrilleros sandinistas a la iglesia y a los partidos de oposición denominados “burgueses”, pusieron fin el 19 de julio de 1979 a cuarenta y dos años de dominación patrimonialista de la familia Somoza sobre un pequeño país de Centroamérica (130.000 km²), poblado con 2,7 millones de habitantes. Se puede decir que estos primeros momentos de la revolución entusiasmaron a la opinión pública tanto en América como en Europa. Los comités de apoyo al pueblo nicaragüense se multiplicaron.

Después sobrevino un tiempo de tensiones internas y enfrentamientos entre dos proyectos políticos (1980-1981): el proyecto de los sandinistas, sus aliados y partidarios, que pretendían la edificación sin dilación de una sociedad socialista a la imagen de la Cuba castrista. Y el proyecto de los sectores políticos moderados, los círculos empresariales, una gran parte del campesinado, los indígenas Miskitus y los jerarcas de la iglesia católica, quienes se hicieron cada día más reticentes a las pretensiones del Frente sandinista de imponer a cualquier costo su supremacía. Estas tensiones internas llevaron a cinco años de guerra civil (1982-87) entre un mosaico de grupos armados —ex militares de Somoza, campesinos y indígenas, antiguos revolucionarios, *la*

Contra— apoyados financieramente por Estados Unidos y las tropas del ejército popular sandinista en una guerra particularmente mortal. Estos enfrentamientos ocuparon los titulares de los medios de comunicación internacionales y dividieron de forma duradera la opinión pública mundial. Debía apoyarse incondicionalmente la revolución o, por el contrario, en nombre de rechazar la expansión del bloque soviético, ponerse del lado de Ronald Reagan, quien se enfrentaba a una prueba de fuerza con los sandinistas apoyando a los *contras*. ¿Podríamos escapar de esta bipolarización sin perder interés en la situación?

El final de la guerra (1988) y la organización de elecciones libres (1990) marcaron, sin duda, el fin de la supremacía del partido-Estado construido por los sandinistas y sentaron las bases para un funcionamiento democrático. Los sandinistas aceptaron la derrota en las urnas y cedieron el poder a la líder de la unión nacional de oposición, Violeta Chamorro, viuda del gran periodista cuyo asesinato había desencadenado la revolución doce años atrás. Sin embargo, los años que van desde 1990 a nuestros días no se tradujeron en el establecimiento de un régimen democrático, sino en la actualización de los viejos mecanismos clientelistas que fueron la base del dominio de la familia Somoza. Y la última paradoja, Daniel Ortega, el jefe de las filas sandinistas, el número uno del gobierno sandinista durante los años ochenta, volvió al poder en 2007 y se ha transformado hoy en un caudillo que se asemeja por su estilo de gobierno al de Somoza, que la revolución sandinista había derrocado en 1979. La única diferencia con Somoza es que Daniel Ortega no se apoya en una alianza privilegiada con Estados Unidos, quienes fueron por mucho tiempo el principal comprador de los productos agrícolas nicaragüenses, sino sobre Venezuela y después China y Rusia. Estos últimos treinta años coincidieron también con una pérdida del interés de la opinión pública mundial por la suerte de Nicaragua. Ya no se habla de un país que solo evoca pasiones extinguidas por el fin de la Guerra fría y que había decepcionado tanto a los partidarios del sandinismo como a quienes habían creído en un renacimiento democrático en los años noventa.

¿Cómo comprender que en cuarenta años este país ha conocido una revolución en el sentido astronómico del término? Es decir, primero, un

levantamiento popular que puso fin en 1979 a una tiranía de cuarenta años; luego, una guerra civil entre los partidarios de una sociedad socialista a imagen de los “socialismos reales” —recuperando una expresión famosa de Nikita Kroutchev— y los partidarios de una sociedad democrática y capitalista; finalmente, a partir de los años noventa una creciente corrupción de las instituciones democráticas y por fin un retorno a las costumbres del régimen derrocado en 1979.

La maldición del Güegüense es un libro que se esperaba desde hace mucho tiempo: un testimonio que nos describe desde el interior la paradoja tanto de la revolución sandinista como de sus secuelas. Sin duda, no nos faltaba información sobre esta revolución y sus secuelas que ya habían decepcionado. Desde el inicio, los participantes de la revolución sandinista habían denunciado su curso burocrático y las aspiraciones totalitarias de los sandinistas. La prensa internacional había hecho eco de estos testimonios y un cierto número de actores revolucionarios habían publicado sus memorias, como el exvicepresidente sandinista, el escritor Sergio Ramírez, con motivo del vigésimo aniversario del 19 de julio de 1979.¹ Los periodistas nicaragüenses habían descrito sin rodeos las dificultades de instituir un régimen democrático tras la derrota de los sandinistas, volviéndose cronistas rigurosos de la influencia creciente de la corrupción sobre las instituciones políticas.² Lo interesante del libro de Moisés Hassan reside en la singularidad de sus posiciones políticas y de sus itinerarios que le dan un toque particular a sus análisis.

Nacido en 1942 de un padre palestino y una madre nicaragüense, Moisés Hassan se convirtió muy joven en profesor de física y matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN); fue uno de los pocos universitarios que se unieron al frente sandinista desde finales de los años sesenta. Sin embargo, Hassan se distanció un tiempo de los sandinistas cuando aceptó una beca de la Universidad de Carolina

¹ Alaniz Pinell (1985); Belli (2003); Cardenal (2003); Cruz Porras (2010); Cruz S. (1989); Cruz y Velásquez P. (1986); Ramírez (1999); Velásquez P. (1986); Zavala (1984).

² Particularmente aquellos de las redacciones de *Envío* y *Confidencial*, ambas accesibles en línea.

del Norte para hacer sus estudios de doctorado en física nuclear. Su regreso a Nicaragua estuvo marcado por su reingreso al FSLN. Comenzó por animar un movimiento por la defensa de los prisioneros políticos, antes de convertirse en líder, en junio de 1978, del Movimiento Pueblo Unido, una alianza del Frente con el bloque comunista ortodoxo que agrupaba a diferentes organizaciones de masas cercanas al FSLN. A inicios de 1979, se convirtió en uno de los tres responsables de la insurrección armada de Managua (Morales, 1986). Tras el derrocamiento de Somoza (julio de 1979), ocupó los cargos más altos en el nuevo Estado revolucionario. Fue uno de los cinco miembros de la primera Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) entre 1979-1980, junto a los sandinistas Daniel Ortega y Sergio Ramírez, pero también junto a personalidades independientes de los círculos burgueses hostiles a Somoza, Alfonso Robelo, un joven empresario titular del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y Violeta Chamorro. Después de la renuncia de estos últimos a la JGRN en abril de 1980, Hassan formó parte de la segunda Junta con Ortega, Ramírez y dos recién llegados de la corriente conservadora, Arturo Cruz y Rafael Córdoba. Fue a su vez ministro de obras públicas (1981-1983), luego viceministro del interior (1983-1985), antes de dejar el Frente sandinista en 1985 y tras las elecciones de 1984, que llevaron a Daniel Ortega y Sergio Ramírez a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, respectivamente.

Los términos de su carta de renuncia merecen ser recordados, porque ofrecen una primera versión de los rasgos estructurales de sus reflexiones sobre la historia de la revolución. Ante todo, esta carta es una acusación definitiva contra las desviaciones burocráticas del FSLN. Hassan señalaba que fue desde sus primeros días que la revolución sandinista del 19 de julio de 1979 instauró un estilo de gobierno vertical y autoritario que prohibía toda crítica y discusión de fondo sobre las orientaciones establecidas por la Dirección Nacional (DN) del FSLN. Precisa que esa forma de gobierno estuvo acompañada de un “oportunismo” y de un “servilismo” poco común respecto a la DN, así como de prácticas de corrupción que recordaban en todo sentido a las vigentes bajo los Somoza. Agrega que esas prácticas conjugadas con la “demagogia”, la más irresponsable respecto a los trabajadores, acarrearón no solamente las bajas de productividad en todos los sectores activos, sino paralelamente

provocaron una emigración de técnicos e ingenieros. Tantos fenómenos, escribe, contribuyeron a la “descomposición social” que prohibió a la revolución enfrentar eficazmente la “brutal agresión imperialista” lanzada por Ronald Reagan desde que entró en funciones en 1981.

Pese a su ruptura con el Frente, aceptó convertirse en alcalde de Managua de 1985 a 1988, exigiendo no depender de la DN, sino de la Presidencia de la República. Destituido de su cargo como alcalde tras los acuerdos de cese al fuego entre la *Contra* y el gobierno sandinista (1987), rechazó el puesto de rector que le ofrecieron y abandonó desde entonces toda función oficial. Candidato del Movimiento de la Unidad Revolucionaria en las elecciones presidenciales de 1990, obtuvo un poco más del 1 por ciento de los votos, lo cual, sin embargo, lo hizo merecedor de un cargo de diputado en la nueva Asamblea Nacional, donde permaneció de 1990 hasta 1996. Finalmente, volvió a ser profesor en la UNAN.

Este recorrido muestra la singularidad de la posición de Moisés Hassan en el panorama político nicaragüense. Es a la vez uno de los pocos científicos del país y uno de los pocos de aquellos que ocuparon las más altas responsabilidades, tanto en la insurrección contra Somoza como en el nuevo Estado revolucionario, o en la época posterior a la derrota sandinista. Además, sus palabras no son solo las de un memorialista de los años revolucionarios y de sus secuelas; también son las de un ensayista que intenta pensar lo más rigurosamente posible un continuo de momentos históricos a partir de su experiencia propia. También, hay que señalar que en más de una ocasión su atención a los acontecimientos, lo conduce a observaciones que convergen tanto con los análisis de algunos grandes sociólogos especialistas de América Latina, como con los de filósofos o historiadores del totalitarismo. Finalmente, Moisés Hassan tiene una última singularidad con relación a muchos otros memorialistas de la revolución: no cede ni a la nostalgia fácil de tiempos heroicos, ni a la antífona de “nosotros no sabíamos” y del “nosotros estábamos atrapados en una mecánica que nos superaba”. Se niega a ocupar una posición de superioridad, donde un narrador cuenta distanciado de los hechos una historia en la cual no hubiera sido un actor clave. Al contrario, muestra sin *pathos*, sus dudas, vacilaciones e interrogantes. Describe, en definitiva, sin tapujos, cómo una innegable servidumbre

voluntaria hizo que muchos perdieran todo sentido crítico en diversos momentos cruciales de la historia nicaragüense.

La cultura política nicaragüense

El mismo título de este libro *La maldición del Güegüense* nos hace introducirnos completamente en una serie de reflexiones sobre la cultura política nicaragüense. En sus descripciones del curso de la revolución como el nacimiento de una burocracia revolucionaria y su funcionamiento, Moisés Hassan evoca más de una vez al *Güegüense*, este personaje tramposo, fanfarrón, héroe de un ballet dramático nicaragüense, escrito en náhuatl y en español en el siglo XVI. Un personaje comparable a Renard, en la novela homónima de la Edad Media europea, el *Güegüense* es un personaje pícaro y astuto. Él se burla de las autoridades españolas al tiempo que finge obedecerlas, y al final, les juega mil trucos, sin cuestionar jamás de manera abierta su dominio. Se encuentran formas análogas en una buena parte del folklore centroamericano, particularmente en las historias del *tío conejo* y *el tío coyote*.³ Para seguir a Moisés Hassan, los modos de acción de los nicaragüenses, tanto bajo el dominio de los Somoza como en la época de los sandinistas o en nuestros días, llevan la marca de estas maneras de hacer. Cuenta el beneficio personal y el actor solo busca adaptarse a la situación del momento, mientras que las autoridades son a la vez burladas y temidas. Es mejor engañarlas en beneficio propio que oponerse abiertamente a ellas. Por consiguiente, nunca se intenta construir otro tipo de sociabilidad basada en una *ética* de la responsabilidad donde el conflicto abierto aparecería como el fundamento de una sociabilidad democrática. No se busca la institución de un mundo donde exista un espacio público en el que sería posible un conjunto de deliberaciones susceptibles de crear consensos no solo basados en la defensa de los intereses inmediatos. Sin duda, es necesario matizar esta voluntad de inscribir las modali-

³ En Stone (2001) hay un análisis notable del significado político de estos cuentos.

dades de acción de los nicaragüenses en el largo plazo de una cultura percibida como inmutable del siglo XVI al siglo XXI. Asimismo, no se puede subestimar la cesura que representa la revolución sandinista en la historia de Nicaragua, incluso las aspiraciones democráticas que surgieron tras la derrota de los sandinistas. Dicho esto, la metáfora del *Güegüense* empleada por Moisés Hassan es notablemente esclarecedora, ya que permite, en primer lugar, comprender mejor el contexto nicaragüense en el cual se inscribe la revolución y, en definitiva, capturar mejor la dinámica política del país, desde la derrota electoral de los sandinistas en 1990 a nuestros días. Nada es más evidente, como se verá, que la dificultad de Nicaragua para instituir las costumbres democráticas. Desde hace más de treinta años, *la clase política parece ante todo preocupada por perpetuarse en el poder*. Ésta vive perfectamente de la política, de la que extrae salarios muy altos, que muchos complementan ventajosamente a través de diversos tráicos de influencias que cada día son más jugosos. A esto se añade el dinero que viene del tráico de droga, cuyo peso ha crecido en la economía nicaragüense, ya que el Istmo centroamericano se ha convertido después de quince años en el punto de paso obligado de los cargamentos de cocaína con destino a América del Norte.⁴

Claramente esta imagen tiene sentido siempre que se considere el peso de las costumbres nicaragüenses y más específicamente aquello que uno de los mejores conocedores de América Central, el norteamericano Charles Anderson, denominó en los años sesenta “el sistema de competidores por el poder” (Anderson, 1964, 1967). Para este último, aunque después de la independencia los países latinoamericanos estaban regulados por constituciones democrático-liberales que instituían el sufragio universal, no por ello dejan de tener costumbres políticas en

⁴ La novela de Sergio Ramírez, *El cielo llora por mí*, ofrece información valiosa sobre la importancia de esas actividades y el factor de la corrupción que éstas constituyen (Ramírez, 2011). Véase sobre este punto la información regularmente publicada en la prensa de lengua española tanto en España, particularmente en *El País*, como en la prensa centroamericana: *Envío* y *Confidencial* de Nicaragua, *El Periódico* de Guatemala, y *El Faro* del Salvador, todos disponibles en línea.

ruptura con los principios democráticos. Se consideraba que solo un pequeño número de personas instruídas y capaces podían participar en los juegos políticos y en la conducción de los asuntos públicos. Estos actores que eran a la vez las élites económicas y financieras (propietarios de minas o de latifundios, potencias financieras e industriales), la jerarquía eclesiástica, los militares y algunos líderes de los sectores populares y de las clases medias, colaboraban para lograr los acuerdos en la cima sobre la gestión de asuntos públicos. También parecía perfectamente legítimo para el conjunto de estos actores que tanto unos como otros pudieran recurrir a sus aliados extranjeros en su enfrentamiento con sus asociados rivales. Y es solo después de estas demostraciones de fuerza, seguidas de acuerdos en la cúpula, que se convocaban a elecciones para ratificar estos acuerdos. Se entendía que, independientemente de la disminución relativa de la influencia de los competidores más antiguos en el poder, no se les podía sacar del juego de las negociaciones. También se entendía que este círculo de competidores por el poder, podía admitir a nuevos actores siempre que estos supieran moderar sus pretensiones con relación a las de los poderes establecidos. Era solo un caso donde se podía decidir la expulsión de uno de los competidores, si éste por sus apetitos de poder, su sed de prebendas o su violencia, amenazaba la existencia de sus competidores. Finalmente se entendía que el poder y la influencia no eran desinteresados, sino que podían abrir el camino a la fortuna. Estas costumbres políticas iban de la mano con una representación del derecho ampliamente instrumental. El derecho y su respeto, para recuperar los términos de Claude Lefort (1981), no estaba desincorporado del poder, dependía de los acuerdos *ad hoc* y fluctuantes a merced de la evolución de la correlación de fuerzas dentro de la nebulosa de los competidores por el poder. El ideal tipo del *Güegüense* es, en cierta manera, el complemento, ya que permite captar las estrategias y las tácticas de los actores en este contexto y especialmente aquellas de los actores en posiciones subordinadas. Además, esta referencia permite comprender cómo este modo de acción oportunista a corto plazo refuerza la acción de los actores oligárquicos, contra los cuales sus competidores son impotentes para aliarse.

Desde los años de independencia en los inicios del siglo XIX, el juego político y económico estaba dominado por dos grandes entidades: el

mundo de las élites de Granada, políticamente conservadora, y la de las élites de León, políticamente liberal. Hasta el siglo XX, ningún grupo logró emanciparse de estas dos fuerzas y suplantadas. Estas dos redes de clanes familiares tejen toda una malla de relaciones de subordinación, obligaciones y protecciones. Por último, no existe ninguna institución, particularmente judicial, constituida como un poder independiente y neutro frente a los conservadores y los liberales que pueda proteger a los individuos o a los actores colectivos frente a las pretensiones hegemónicas de los grupos oligárquicos. La existencia, la acción y la protección son posibles solo en función de su inclusión en este sistema de pactos entre líderes conservadores y liberales. Y la afiliación a estas redes permite asensos sociales espectaculares, de los que Somoza y su personal político son ejemplos extraordinarios.⁵ Al contrario, la trayectoria de Sandino ilustra la fuerza de esta influencia. Proveniente del mundo liberal, ciertamente pudo rechazar por un tiempo la política de arreglos entre liberales y conservadores, pero no logró constituirse de forma duradera en actor independiente. Logró combatir con éxito a los marines (1927-1934) e influir sobre el juego político nicaragüense. A pesar de que el acuerdo que firmó con el Presidente para desarmar a sus tropas después de la partida de los soldados norteamericanos no se respetó, fue asesinado al igual que una buena parte de sus seguidores. Del mismo modo, en los años cuarenta, cincuenta y sesenta, los jóvenes turcos conservadores, como Pedro Joaquín Chamorro, o los liberales hostiles a Somoza del Partido Liberal Independiente, lucharon para reunir seguidores y nunca llegaron a desafiar seriamente el juego pactista antes de la década de los setenta. Cabe señalar que este sistema de padrinzos y protecciones, así como la recurrencia a intermediarios, fueron acompañados casi siempre por transacciones pecuniarias que solo impactaban si parecían desproporcionadas con relación a los servicios previstos. Fueron consideradas funcionales y, de cierto modo, inevitables.

⁵ El historiador Jeffrey Gould (1992) ha realizado análisis decisivos sobre este punto, donde demuestra como Anastasio Somoza García y su hijo, Luis Somoza Debayle supieron hacer espacio para toda una serie de recién llegados al mundo de la política, a expensas de los clanes conservadores.

Lo que demuestra Moisés Hassan al hilar esta metáfora del *Güegüence* es como, tanto bajo el régimen sandinista como durante los años posteriores, los nicaragüenses no han roto con esta idea de que cualesquiera que sean sus posiciones sociales, los actores son “jugadores asimétricos” u “oportunistas vulnerables”,⁶ que se inscriben en las redes de dependencia y lealtad de los poderosos del momento. La revolución no fue el momento de destrucción de todas las antiguas redes del poder y de hacer *tabula rasa* para que la autoorganización fuera posible. Tampoco fue el momento del advenimiento de una relación nueva con el derecho. Estuvo marcada por la eliminación de las redes de poder somocista y por la tentativa fallida de redes reducidas a la porción adecuada bajo el último de los Somoza, el mundo empresarial y la nebulosa de conservadores y de liberales independientes, de influir con un peso nuevo. Para los nicaragüenses, la revolución significó el advenimiento de una nueva red de poder construida alrededor del nuevo partido-Estado sandinista. Y está en perfecta conformidad con los modos de acción del régimen anterior que, en los años ochenta, muchos nicaragüenses se afiliaron al Frente convirtiéndose en miembros de las nuevas organizaciones de masas, no solamente por afinidad política con su proyecto de crear un “hombre nuevo”, sino más por el objetivo de mejorar sus posiciones sociales o las de sus allegados, y por tener buenas relaciones con el poder en turno. Nada más sorprendente que la adhesión del mundo de los maestros y del profesorado al proyecto sandinista, que en gran medida habían estado previamente en contacto con las redes del partido liberal de los Somoza. Se pueden hacer las mismas observaciones sobre del mundo de los empleados del Estado. De igual forma, los sindicatos sandinistas fueron percibidos por los nuevos miembros como los más capaces de protegerlos. Finalmente, con motivo de las diferentes modificaciones de la Junta de Gobierno (mayo de 1980 y marzo de 1981), o las recomposiciones sucesivas del Consejo de Estado (abril, noviembre, diciembre de 1980 y mayo de 1981), toda una serie de personalidades eligieron ante todo negociar con los hombres fuertes

⁶ Tomo estos términos de Danilo Martucelli (2010), quien presenta un retrato magistral de este tipo de sociabilidad.

que eran los sandinistas. Así, después del asesinato de Jorge Salazar, el responsable del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), por parte de la policía sandinista en noviembre de 1980, Moisés Hassan subraya como ciertos empresarios tuvieron más ganas de seducir a los sandinistas que de oponerse a ellos, y mucho menos denunciar este acto de terror en contra de posibles opositores. Paralelamente, los hábitos de corrupción de la administración en vigor bajo los Somoza se perpetuaron reorganizándose esta vez en función de las redes de poder sandinistas. Evidentemente, son fenómenos que hundieron sus raíces en un contexto marcado por la dominación de los grupos oligárquicos, donde las leyes no tienen el mismo valor para todos, sino su aplicación está en función de acuerdos *ad hoc*. De ahí, que esta sociabilidad tome un sentido de interés inmediato y de acuerdos con frecuencia improvisados en desprecio de las leyes existentes. Los actores se adhieren a estas prácticas que consideran funcionales, incluso si saben que son ilegales o que son, en el largo plazo, perjudiciales para su país, incluso si se benefician de ellas.

Así podemos ver a Moisés Hassan dar muchos ejemplos de estos fenómenos de adhesión interesada al sandinismo, así como de la evasión de las reglas que se acentuó y se reforzaron mutuamente a partir de 1982. La conjugación de los errores de gestión económica de los sandinistas, la movilización de recursos para el esfuerzo de la guerra, el embargo de Estados Unidos contra Nicaragua y la destrucción efectuada por la *Contra*, provocó una situación de escasez económica e incertidumbre creciente en el seno de la población nicaragüense. Entonces, muchos se permitieron todo tipo de transgresiones en nombre de las necesidades de supervivencia inmediata, y estas fueron toleradas por las esferas dirigentes para no romper la unidad nacional frente a la agresión imperialista. La apropiación de los bienes públicos, que fue la *piñata* tras la derrota electoral, no obedeció a otros instintos. Frente a una derrota que nadie esperaba dentro del Frente, fue el momento generalizado del “sálvese quien pueda” en nombre de la preservación de los logros de la revolución y de los intereses de sus principales actores. A comienzos de 1990, tras la derrota electoral, la Asamblea donde los sandinistas eran mayoría aprovechó sus últimas sesiones para votar leyes que regulaban las transferencias de propiedades —casas, inmue-

bles, propiedades agrícolas, empresas nacionalizadas — en beneficio de los altos dirigentes y de los ejecutivos del Frente, así como de cooperativas agrícolas, de familias campesinas o de habitantes de barrios marginales. Esta primera *piñata* fue seguida de una segunda durante la privatización de las empresas nacionalizadas, una vez más en beneficio de los ejecutivos sandinistas que aceptaron estas privatizaciones a condición de que ciertas acciones volvieran a los grupos sindicales, acciones que acapararon casi inmediatamente sus dirigentes. Al vincular estos tipos de transferencia de propiedad a los que se oponían a todo — algunas perpetuaban la transferencia de la propiedad de un medio de trabajo en beneficio de las familias campesinas, otras ratificaban los abusos de bienes sociales en beneficio de los ejecutivos de gobierno —, esas leyes de la *piñata* crearon, en nombre de la defensa de los beneficios adquiridos durante la revolución, una solidaridad política entre dos poblaciones sociológicamente diferentes, los dirigentes sandinistas y las bases populares del régimen. Las leyes de la *piñata* desdibujaron toda posibilidad de distinguir entre lo justo, la preservación de una redistribución agraria o de una reforma urbana marcada por el sello de una indiscutible equidad, y lo injusto, la constitución de fortunas privadas que hicieron de algunos sandinistas, rivales de los antiguos oligarcas de los años somocistas.

Como lo observa Moisés Hassan, la derrota electoral de los sandinistas provocó la pérdida de su proyecto de crear un partido-Estado por encima de la sociedad y los obligó a negociar. Tuvieron que reconocer su derrota y aceptar la entrega del poder a la nueva Presidenta y a los dirigentes de la UNO. Sin embargo, este innegable cambio en el curso de los acontecimientos no condujo al establecimiento de una sociabilidad democrática, que se impuso poco a poco a expensas de otras costumbres. En efecto, se distingue muy claramente una tensión entre dos tipos de proyectos políticos que difieren en absoluto. Uno aprueba la construcción de un régimen democrático-liberal y al mismo tiempo fue usado por algunos sectores de la UNO, y por algunas fracciones del FSLN — los “pragmáticos”, cuyos líderes eran Sergio Ramírez y Dora María Téllez, quienes renunciaron al FSLN en enero de 1995 y fundaron posteriormente el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). La otra lógica política mantuvo la inercia de las costumbres políticas ni-

caragüenses y la complicidad de intereses que se manifestó muy pronto entre algunos políticos de la UNO y los sandinistas “ortodoxos”, cuyo líder fue Daniel Ortega. Su objetivo apunta a la actualización del viejo sistema de competidores por el poder para hacerlo más funcional. Es necesario precisar que si bien algunos actores políticos se situaron desde el principio en este clivaje, otros se unieron en ocasiones a una lógica y en ocasiones a otra, a pesar de que a partir de 1996 el contexto geopolítico y los juegos de los actores locales favorecieron un retorno a los juegos clientelistas a expensas de las prácticas democráticas.

Aunque Moisés Hassan dedica pocas páginas a este sujeto, es necesario señalar que este proyecto democrático-liberal imprimió su marca un tiempo en los acontecimientos (Bataillon, 1998). El Estado tentacular que había construido el FSLN fue desmantelado, el ejército no solo vio sus efectivos reducidos de forma drástica, sino que fue despolitizado y Humberto Ortega, su general en jefe tuvo que aceptar su jubilación en 1995. Lo mismo ocurrió con la policía que se profesionalizó y que fue, hacia el regreso de Ortega al poder en 2007, una de las más eficaces y menos corruptas de América Central. La iglesia y especialmente el cardenal Obando y Bravo, antiguo arzobispo de Managua, vio también su influencia política disminuir en beneficio de la afirmación de la necesaria separación de lo religioso, un asunto de la esfera privada, y la política. Asimismo, el parlamento pudo perfeccionar las leyes que prohibían tanto la reelección del Presidente al término de su mandato o al concluir dos mandatos, como la elección al término de su mandato de uno de sus parientes cercanos. También se presenció la aparición de un espacio público y de un nuevo sentido de los debates políticos, como lo atestigua el nuevo tono en los periódicos, especialmente dentro de *Barricada*, el diario del FSLN que practicó un periodismo crítico e independiente, como dentro del *Nuevo Diario*, también anteriormente subordinado al Frente. No obstante, se distingue desde los primeros momentos del gobierno Chamorro el peso de sus costumbres antidemocráticas del juego de competidores por el poder en la forma en que se enfrentaron los problemas planteados por la *piñata*.

No cabe duda de que un país saliente de una guerra civil donde 20 000 *contras* aún estaban armados y donde el ejército sandinista todavía disponía de 85 000 hombres, el momento no podría ser otro que el de

las negociaciones. Pero lo que resalta Moisés Hassan es que, más allá de un realismo necesario, prevaleció un espíritu pactista agravado por un sentido de los acuerdos *ad hoc*, ya que ambos prepararon el terreno para una corrupción generalizada de las instituciones políticas. El nuevo gobierno no solamente no juzgó necesario emprender una prueba de fuerza al respecto, sino que tampoco intentó desenredar este embrollo jurídico. Se remitió a acuerdos privados acompañados del uso de la violencia para resolver estos litigios, especialmente en zonas rurales. Y pocos fueron los dirigentes sandinistas, como algunos “pragmáticos” y futuros renovadores como Sergio Ramírez, quienes se dieron cuenta de la ilegitimidad de estas apropiaciones y devolvieron por consiguiente los bienes obtenidos fraudulentamente. La mayoría continuó en posesión de los bienes, y en algunos casos se convirtieron en poderes económicos, a menudo en alianza con inversionistas extranjeros. De manera completamente sintomática, un cierto número de hombres ligados a la UNO o de dirigentes de la *Contra* se apoyaron en estos precedentes para dedicarse a este tipo de maniobras. Se vio a los antiguos jefes de la *Contra* apropiarse de los fondos de tierras destinados a la reubicación de aquellos que habían combatido bajo sus órdenes, mientras que los oficiales del ejército sandinista hicieron lo mismo a expensas de sus soldados, quienes también habían aceptado desmovilizarse en contraprestación a la promesa de recibir las tierras con el objetivo de poder crear empresas cooperativas. Un ministro de la UNO, Tony Ibarra se hizo famoso por su malversación de fondos. También el yerno de la Presidenta, Antonio Lacayo, realizó algunos negocios más que dudosos. Y en los casos en los cuales las autoridades judiciales intentaron aplicar el derecho en contra de políticos prominentes, las autoridades políticas usaron todas sus influencias, ya sea para frenar sus investigaciones, o para destituir a los autores de esas “malas maneras”. De igual forma, las presiones políticas paralizaron eficazmente a la judicatura cuando quiso investigar sobre el centenar de asesinatos de ex dirigentes de la *Contra*. Y cuando logró hacer su trabajo como en el caso de la instrucción del juicio del asesinato de Arges Sequeira, presidente de la Asociación de propietarios de bienes injustamente confiscados por los sandinistas, ¡un decreto de amnistía de la Presidenta anula la decisión de los magistrados!

El mandato de Violeta Chamorro fue también un momento donde la corrupción, en el seno del personal político y de las altas esferas del Estado, prosperó de manera paradójica en nombre del interés general y de la estabilidad política. Para afrontar las reticencias de muchos elegidos de la UNO en términos de arreglar con los sandinistas un cierto número de cuestiones, el gobierno asumió la costumbre de realizar la compra de diputados para asegurarse de su fidelidad en ciertos momentos decisivos. Esta costumbre no fue monopolio del poder ejecutivo, se convirtió en un medio legítimo de flexibilizar el juego político en todos los niveles. Moisés Hassan relata claramente como Arnoldo Alemán, inicialmente un simple consejero municipal y sin oportunidad alguna de acceder a un cargo de importancia, consiguió sustituir al candidato de la UNO, Augusto Jarquín, en la alcaldía de Managua. Gracias a la ayuda de los ricos cubanos exiliados de Miami, tras las elecciones invitó a los concejales municipales a una estancia, con todos los gastos pagados, en un hotel de lujo en Miami, y a recorridos por los cabarets y los clubes nocturnos de la ciudad. Convertidos en sus deudores, los concejales rechazaron a Jarquín y lo eligieron alcalde. Basándose en ese poder, Arnoldo Alemán compró a las personas provenientes de todas las orillas políticas ofreciéndoles puestos de consejeros bien remunerados dentro de su equipo municipal. Así consolidó su red de influencia en el interior del Partido Liberal y pudo ganar en las elecciones presidenciales siguientes en 1996 contra Daniel Ortega.

El mandato de Arnoldo Alemán marcó un punto de inflexión en esta entrega al gusto actual del juego de los competidores por el poder y en un innegable retroceso del dominio de las costumbres democráticas. En efecto, así como este último supo imponerse a costa de sus rivales al interior de la UNO, Daniel Ortega hizo lo mismo dentro del Frente Sandinista, al tomar el control del aparato del partido. Esta minorización de los “pragmáticos”, y la recuperación del control no se hicieron al término de un debate de ideas sobre el porvenir del FSLN, y sobre la estrategia más adecuada para recuperar el poder. Ortega se impuso legitimando un bloque con todos los “logros de la revolución”, es decir, justificando moralmente la *piñata* y dejando entender que una victoria en las siguientes elecciones permitiría recolonizar el Estado y su administración. Basado en los recursos de la *piñata* y los drenados de

la Fundación Augusto Cesar Sandino, distribuyó múltiples prebendas a sus partidarios. Por lo tanto, se convirtió en líder indiscutible del partido y en jefe del grupo sandinista en la Cámara.

Es en ese contexto, del ascenso al poder de Arnoldo Alemán y de la toma del control del Frente Sandinista por parte de Daniel Ortega, que dos causas penales que implicaban a los dos caudillos, tuvieron por efecto conducirlos a realizar un acuerdo que reforzó aún más su dominación sobre el sistema político, incluso lo hizo más inmoral. La primera respecta a Daniel Ortega (Lacombe, 2009). Primero acusado públicamente en marzo de 1998 por Zoilamerica Narváez, la hija de su esposa, de violaciones repetidas, el ex jefe de Estado tuvo que hacer frente en mayo de 1998 a una denuncia por abuso sexual, violación y acoso sexual, investigada por una jueza. Es poco decir que esta acusación trastornó el paisaje político nicaragüense y debilitó un tiempo la posición de Daniel Ortega, a pesar de que los cuadros del FSLN lograron encubrir el asunto. Esto fue aún más fácil cuando una de las juezas a cargo del caso, que era una antigua guerrillera del FSLN convertida en magistrada, declaró que la denuncia no era admisible. A pesar de esta decisión, Ortega se enfrentó en 1999 a una nueva denuncia esta vez interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo caso apuntó a Arnoldo Alemán, quien fue acusado de malversación de fondos de 250 millones de dólares, destinados a los damnificados por el huracán Mitch que devastó una buena parte de Nicaragua en octubre de 1998. Hay que señalar un detalle que no es menor, la jueza encargada de la instrucción fue la misma que había estado a cargo del caso de Zoilamerica y que lo había enterrado. Desde entonces, Ortega se encontró en una situación de fuerza para reactivar un acuerdo con Arnoldo Alemán, cuyos contornos habían comenzado a esbozarse en agosto de 1998, sin lograr un acuerdo formal.

Este acuerdo incluía una repartición de las esferas de influencia económica y política entre Ortega y Alemán (Equipo Nipaltán-Envío, 1999). Para ello, los magistrados que integran las instituciones clave del país, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría (el equivalente al tribunal de cuentas), serán invitados a “dimitir por patriotismo”. Por lo tanto, se podrían nombrar a otros nuevos, por mitades sandinistas y liberales, de tal suerte que en adelan-

te hubiera magistrados capaces de obedecer sin pestañear las directrices de sus jefes de partido. Este proyecto tenía también como objetivo cambiar radicalmente los dispositivos legales que habían instituido una gran libertad de asociación política. Al contrario, se quiso restringir de manera drástica esta libertad, de tal modo que los rivales del Frente Sandinista y del Partido Liberal no puedan ganar nunca en las elecciones, y sean eliminados poco a poco de la competición electoral. Un dispositivo adoptado posteriormente llegó para perfeccionar aún más este sistema. Se votó en el 2000 una nueva ley electoral que planteó que, con el fin de ahorrar al país los gastos de una segunda vuelta electoral para la elección presidencial, si un candidato obtenía desde la primera vuelta un mínimo de 35 por ciento de los votos emitidos y se distanciaba al menos en un 5 por ciento de los resultados de su principal competidor, entonces sería elegido Presidente de la república, sin necesidad de organizar una segunda vuelta. Así, se evitarían los peligros de una coalición en segunda vuelta, ya sea contra Ortega o contra el candidato de los liberales. La investigación judicial contra Alemán y luego su condena a 30 años de prisión en 2003, permitió a Daniel Ortega y a sus partidarios negociar lo mejor posible este acuerdo conocido bajo el nombre de “Pacto”. Hicieron que los liberales aceptaran todas las cláusulas a cambio de la promesa de que la pena de prisión de Alemán sería conmutada, por razones de salud, en una pena de prisión domiciliaria, y que esta sería incluso más flexible, de tal suerte que Arnoldo pudiera desplazarse por la capital y después por todo el país. Y cuando muchos responsables de los medios de comunicación, como los portavoces de los renovadores sandinistas y aquellos de la corriente conservadora o de la disidencia liberal, protestaron contra esta tutela del juego político, fueron derrotados. La gran mayoría de los miembros de la clase política, de la magistratura, así como el jefe de la iglesia católica, el cardenal Obando y Bravo, siguieron en nombre de la necesaria “estabilización” del país, las órdenes de los dos caudillos.

No hay duda de que este acuerdo, negociado de 1998 al 2000, ha funcionado del mejor modo posible. Este contexto permitió en 2006 la elección de Daniel Ortega a la presidencia de la república desde la primera vuelta, con el más bajo porcentaje de votos que se haya tenido jamás (38 por ciento de los votos), sin que se organizara una segunda

vuelta, donde un acuerdo electoral entre sus principales rivales (Eduardo Montealegre y José Rizo, quienes totalizaron 55 por ciento de los votos emitidos) habría causado su derrota (*Envío*, 2006). Convertido de nuevo en Presidente de la república a principios de 2007 y con la fuerte ayuda económica del gobierno venezolano de Hugo Chávez, Daniel Ortega pudo poner en marcha, so pretexto de promover la “democracia directa”, las bases de una dictadura familiar. Su estrategia está basada, por una parte, en la reducción total de la independencia judicial en todos los niveles; por la otra, en la neutralización del Consejo Supremo Electoral y la fagocitosis de la asamblea nacional mediante la corrupción y el chantaje en contra de los diputados susceptibles de dar muestras de independencia. Finalmente, ha multiplicado las acciones en favor de los sectores populares afiliados al FSLN.

También, hizo aprobar una ley que aumentaba considerablemente la remuneración de los diputados. Hasta entonces estos recibían menos de 1 500 dólares al mes, su salario pasó a cerca de 5 000 dólares mensuales, a los cuales se añadieron 23 000 dólares anuales de “gastos profesionales” para ser usados de forma totalmente discrecional, lo que les permite beneficiarse de un ingreso mensual de cerca de 7 000 dólares, cantidad muy elevada si se consideran los ingresos de los demás nicaragüenses.⁷ Daniel Ortega, además ha emitido un decreto organizando un sistema de Consejos de Poder Ciudadano (CPC) sometidos bajo la autoridad de su esposa Rosario Murillo, cuyos responsables locales provienen en su totalidad del FSLN y son nombrados con el aval de esta última. Los CPC permiten la elaboración de un sistema de asistencia social selectivo, que

⁷ Estos emolumentos hicieron de los diputados nicaragüenses los diputados mejor pagados de América Central, mientras que Nicaragua era, junto con Honduras, uno de los dos países más pobres de la región. A título de comparación, un médico hospitalario obligado a las guardias percibía (en 2010) un salario mensual de 710 dólares, a un profesor de universidad le tocaban de 400 a 1100 dólares. Los empleados de las ONG nacionales que, de hecho, desempeñaban el papel de agencia gubernamental en el ámbito de la salud o del desarrollo tenían salarios mensuales que oscilaban entre 400 y 1 500 dólares, aquellos de las ONG internacionales recibían remuneraciones de 1 200 a 1 800 dólares al mes y los responsables de las ONG recibían 3 000 dólares. El salario mínimo era entonces menos de 100 dólares mensuales.

no está en función de los ingresos de las personas beneficiarias, sino de su inscripción a una red de afiliación partidista, construida a través de la presidencia de la república, a partir de la cual las ayudas, posibilitadas por la cooperación económica de la Venezuela de Hugo Chávez, son distribuidas de manera discrecional por Rosario Murillo.

Asegurado el control de la Cámara y de los poderes judiciales, así como de la construcción de estas redes de apoyo, Daniel Ortega no disolvió los partidos que habían denunciado el pacto, pero les prohibió buscar votos en cualquier elección, especialmente en las elecciones municipales de noviembre de 2008. Finalmente, a estas maniobras legales se añadieron actos de intimidación y de violencia contra personalidades independientes, particularmente periodistas, artistas, ONG's feministas, quienes no cesan de denunciar la impunidad de Ortega frente a las acusaciones de su hijastra, el pacto firmado con Alemán y sus consecuencias, los casos de corrupción y los sobornos, donde están implicados algunos cercanos a la presidencia, así como el fraude electoral masivo en beneficio del FSLN en las elecciones municipales de 2008.⁸

Gracias a la corrupción de un parte de los magistrados de las diferentes instancias del poder judicial, y al control del parlamento, Daniel Ortega se pudo lanzar con éxito en 2011 en una nueva campaña electoral triplemente fraudulenta. En efecto, la Cámara no se inmutó cuando los magistrados de la más alta autoridad en materia electoral, el Consejo Supremo Electoral y aquellos de la Corte Suprema de Justicia declararon que aunque la Constitución claramente prohíbe al Presidente saliente postularse para un nuevo mandato, y si bien todo ciudadano nicaragüense que ha sido Presidente de la república dos veces no puede serlo una tercera vez, su candidatura fue declarada admisible porque esas disposiciones creaban discriminación entre los ciudadanos y, por lo tanto, desigualdades contrarias al espíritu de la Constitución. Poco preocupado por la libertad de voto de los ciudadanos, y temiendo obtener un resultado apenas suficiente para ser elegido Presidente de la

⁸ Se encuentra mucha información sobre estos temas en los diferentes números de las revistas *Envíos*, *Confidencial* y *Letras Libres*, así como en Bataillon (2010, 2008), Chamorro (2009) y Téllez (2009).

república desde la primera vuelta, o peor, enfrentar las incertidumbres de una segunda vuelta, Daniel Ortega ha multiplicado las maniobras fraudulentas. Sus partidarios tomaron diferentes medidas para impedir que los posibles oponentes al FSLN votaran y llenaron las urnas en favor del FSLN. Estas prácticas aseguraron una victoria sin precedentes del FSLN en las elecciones presidenciales y legislativas. Por ello, Daniel Ortega obtuvo 62 por ciento de los votos en las presidenciales y una mayoría absoluta de 60 diputados de los 92 que conforman la Asamblea (Equipo Envío, 2011).

Después de 2011, el control de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo sobre el país se ha fortalecido, como lo han demostrado ampliamente las elecciones de 2016, que fueron enteramente orquestadas por el FSLN, que estuvo involucrado en su organización debido a su control total del Consejo Supremo Electoral (CSE), organismo encargado de elaborar las listas de los electores y de emitir las tarjetas electorales, así como de la organización de las votaciones. Los resultados fueron falsificados de varias maneras. El CSE redujo el número de inscritos en las listas electorales. Luego, ante la abstención del 70 al 80 por ciento de votantes, los escrutadores llenaron las urnas en beneficio del FSLN, de tal suerte que 68.2 por ciento de los electores parecen haber visitado las urnas y 72.5 por ciento de estos haber votado por el FSLN (Equipo Envío, 2016). Cabe señalar que si bien diferentes partidos de oposición protestaron en contra de este fraude, junto con la iglesia católica, los círculos empresariales, mimados por la política fiscal del gobierno, se adaptaron perfectamente. El FSLN también pudo contar con el apoyo de una parte de los sectores populares que, a su vez, pudieron contar con políticas de subsidios de transporte público urbano en la capital y acceso a energía eléctrica a bajo costo para los pequeños consumidores, así como con ayudas personalizadas para los fieles al partido y a sus organizaciones de masas a través de un sistema clientelista desarrollado bajo la responsabilidad directa de Rosario Murillo, convertida en vicepresidente de su esposo (Rocha, 2016).

Desde entonces, el gobierno tuvo que afrontar diferentes movimientos de oposición: el movimiento campesino impugnando el proyecto de concesión del canal interoceánico a una empresa china, los movimientos de mujeres denunciando la ley antiaborto votada por el parla-

mento en 2007, así como la indulgencia de las autoridades frente a la violencia contra las mujeres, las ONG's y los medios de comunicación independientes criticando la mezcla de autoritarismo y corrupción en que se fundamentan las modalidades de ejercicio del poder de la pareja presidencial. Además, el gobierno fue desafiado como nunca antes por una insurrección cívica en 2018, que vio movilizarse, de abril a julio, de costa a costa, tanto a la juventud y las poblaciones urbanas, como a las rurales y una parte del mundo empresarial, y también a la iglesia que apareció como la más alta autoridad moral del país. En efecto, este movimiento obligó por primera vez a Ortega y Murillo a negociaciones y concesiones inimaginables pocos meses atrás, pero aunque esta pareja de tiranos fue debilitada, sin embargo prevaleció por una represión brutal y metódica que permitió que fuese capaz de lograr perpetuarse en el poder, gracias a nuevas elecciones fraudulentas en 2021 y a una cooptación de algunos de sus opositores políticos y de los círculos empresariales.

En otras palabras, al considerar las cuatro últimas décadas de la historia nicaragüense, las palabras de Moisés Hassan sobre la maldición del *Güegüense* son indiscutiblemente un notable esquema de lectura del curso de los acontecimientos. Permiten comprender cómo dentro de un contexto determinado, en el que los recursos económicos dependen fundamentalmente de las buenas relaciones con las autoridades en turno, los actores sociopolíticos, en su mayoría, optan repetidamente por hacer acuerdos con los poderosos del momento. Por otra parte, cualquiera que sean los esfuerzos por romper este sistema sociopolítico, hasta la fecha no han sido concluyentes. Ciertamente han permitido que las coaliciones permanezcan en dos ocasiones (1979 y 1990) contra los tiranos que se volvieron muy poderosos, como el último de los Somoza y los sandinistas. No obstante, estas victorias no han puesto fin a ciertas representaciones de lo político, donde la especulación combinada con los acuerdos entre poderosos aparecen como prácticas en el fondo legítimas, por encima de los dispositivos legales. De ahí, la paradoja de la instauración de un sistema dictatorial en beneficio de la familia de un caudillo proveniente de las filas de un partido revolucionario. El énfasis que Moisés Hassan pone sobre la preminencia de los intereses inmediatos del actor y de sus allegados, y sobre la ausencia casi general de las

consideraciones respecto de las consecuencias de las acciones egoístas para otros, dibuja un horizonte social hiper-individualista y jerárquico que niega toda idea de igualdad y similitud entre los hombres, situación que recuerda, sin duda, las consideraciones de Banfield (1958) sobre la falta de moralidad familiar en Sicilia, o la de Oberschall (1973) sobre las dificultades de la acción colectiva en las situaciones de gran segmentación social.

La caída de la dictadura somocista y el ascenso al poder del FSLN

La mayor parte de los análisis consagrados a la caída de Somoza y a la capacidad que tuvieron los sandinistas de imponerse como la punta de lanza de la oposición a Somoza insisten, con razón, en la importancia de las revisiones estratégicas, a las cuales procedieron a finales de la década de 1970, y primordialmente los terceristas para poder aliarse con éxito con los otros grupos de oposición a Somoza, particularmente con los sectores empresariales y con los movimientos políticos provenientes del Partido Conservador, el partido rival del Partido Liberal Nacionalista de Somoza (Caroit y Soulé, 1981; Weber, 1981; Walker, 1982, 1985; Christian, 1985; Vilas, 1987). En ruptura con la teoría de la “guerra popular prolongada” (GPP) profesada por el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador, como con la de sus primeros oponentes, “los proletarios”, partidarios de un abandono de la lucha armada en favor de un trabajo de organización dentro de la clase obrera, los terceristas estimaron que la creación de guerrillas rurales y de zonas liberadas destinadas a convertirse en embrión de una avanzada armada, capaz de atacar las zonas urbanas y de vencer al ejército regular, estaba condenada al fracaso. Por lo tanto, sin abandonar la idea de la lucha armada y el proyecto de la construcción de una avanzada armada — futuro partido dominante —, estos últimos defendieron una multiplicación de los golpes de fuerza en alianza con todos los grupos de oposición a la dictadura. Su idea fue jugar con las “contradicciones internas de la burguesía” y proponer a ciertas fracciones de éstas una

“alianza antiimperialista”. Esta táctica adquirió su sentido tras el asesinato en enero de 1978 del gran periodista de oposición, líder de la Unión Democrática de Liberación (UDEL), Pedro Joaquín Chamorro, donde una parte de hombres de negocios y políticos, hasta entonces partidarios de eventuales acuerdos con Somoza, ahora exigían su salida. Desde entonces, Somoza se encontró aislado y a la defensiva, tanto en el plano interno como en el plano externo, en razón a la nueva política de defensa de los derechos humanos de Jimmy Carter. Paralelamente, a pesar de sus divisiones y rivalidades, las tres tendencias del FSLN, “GPP”, “proletariado” y “tercerista”, lucharon, de hecho, codo a codo para derrocar a Somoza. Tras el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, la combinación de las huelgas generales iniciadas por los círculos empresariales, con las insurrecciones populares enmarcadas por el FSLN, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, consagró el aislamiento definitivo de Somoza. En el plano interior, la iglesia tomó partido al legitimar la insurrección armada a principios de 1979, y en la escena internacional se multiplicaron las presiones dirigidas a obtener la salida de Somoza. Finalmente, en mayo de 1979, la Organización de Estados Americanos conminó a Somoza a renunciar y reconoció en junio a la JGRN como el único gobierno legítimo.

Sin cuestionar el ritmo de estos acontecimientos, el relato y el análisis que hace Moisés Hassan viene a matizar singularmente los hechos. Así, propone una nueva interpretación de las divisiones que surgieron dentro del FSLN en los años setenta, así como de la génesis de las alianzas entre los llamados “terceristas” y los círculos políticos tradicionales en lucha contra Somoza.

La primera revisión importante introducida por Moisés Hassan se refiere a las modalidades en que aparecen las tendencias al interior del FSLN. Lejos de haber nacido de los únicos debates sobre las tácticas a implementar para derrocar a Somoza, estas divisiones fueron también el fruto de luchas exacerbadas por el poder dentro del Frente. Recordemos el contexto nicaragüense a mediados de la década de 1970, después del terremoto de Managua en diciembre de 1972. La capital estaba destruida en más del 50 por ciento y se contaban cerca de 20 000 muertos y otros tantos heridos en una población de 325 000 habitantes. El país estaba sujeto a la mano de hierro de Somoza, que en esa época

recibía un apoyo casi incondicional de Estados Unidos. Ante el caos que reinaba, los guardias nacionales lejos de proteger a la ciudad de los saqueos y de combatir eficazmente los incendios, estuvieron más preocupados de encargarse de sus allegados que de actuar en beneficio de toda la población. Por lo tanto, Somoza hizo un llamado a Estados Unidos. Un contingente de *marinos* aparcados en la zona del canal de Panamá fue enviado a Managua, mientras que la Guardia se recomponía. Estos *marinos* se instalaron en los alrededores del bunker de Somoza. Vino entonces el tiempo de una reconstrucción de la que Somoza, quien ya había obtenido la ayuda internacional en beneficio de sus allegados, pretendía sacar todos los beneficios para él y sus dependientes políticos. Frente a esto, Pedro Joaquín Chamorro, el director del principal diario nicaragüense, la *Prensa*, se hizo portavoz de todos aquellos que estaban escandalizados por esta corrupción. La iglesia le dio su apoyo. Pedro Joaquín Chamorro logra unir dentro de la Unión Democrática de Liberación (UDEL) a los políticos partidarios de acabar con la política de los acuerdos con Somoza. Por el contrario, si después del terremoto el Frente logró atraer hacia él a los jóvenes, la mayoría de ellos procedentes de las clases medias y de los círculos católicos, o de los intelectuales provenientes de buenas familias como Ernesto Cardenal⁹ o Gioconda Belli,¹⁰ no estaba menos a la defensiva, y al final contaba con muy pocos militantes. Adicionalmente, sus líderes estaban tanto en exilio, como su fundador histórico Carlos Fonseca Amador quien vivía en Cuba, o en prisión como Daniel Ortega, o finalmente, en la clandestinidad al frente de una columna de guerrilleros muy aislados, como Henry Ruiz y Pedro Arauz. Es en este contexto que un comando sandinista organizó desde Costa Rica, el 27 de diciembre de 1974, una toma de rehenes en la casa de un ministro de Somoza. La operación fue un éxito incuestionable. Los sandinistas obtuvieron la liberación de catorce de los suyos, entre ellos Daniel Ortega, un rescate de más de un millón de dólares y, finalmente, la lectura y publicación de sus comunicados en los

⁹ Se pueden ver sobre este punto dos de sus poemas, “Canto nacional” y “Oráculo sobre Managua”, y el segundo volumen de sus memorias (Cardenal, 2003).

¹⁰ Ella relata muy bien su entrada al FSLN tras el terremoto en su autobiografía *El país bajo mi piel* (Belli, 2003).

medios de comunicación nicaragüenses.¹¹ Si bien los sandinistas fueron el centro de atención, no por ello ganaron la adhesión del grueso de los nicaragüenses. En efecto, aunque el gesto del Frente les había valido el favor de una parte de la juventud, el tono marxista-leninista de sus comunicados, siguió siendo un repelente para una gran parte de la población, especialmente para las personas sensibles a las tesis de inspiración demócrata cristiana propugnadas por la UDEL. La represión tan brutal lanzada por la dictadura, tras la toma de rehenes, consagró una escisión radical entre dos grupos al interior del FSLN: los defensores de una guerra popular prolongada que conduciría a la creación de zonas liberadas al interior del país; los partidarios de operaciones armadas específicas lanzadas desde el exterior y, en particular, desde Costa Rica, donde los dirigentes revolucionarios permanecerían instalados en una relativa clandestinidad. Los primeros estaban en la situación más difícil. Si bien podían argumentar que estaban siguiendo la línea trazada por el fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador, no por eso sobrevivieron a la más grande precariedad mientras la autoridad de su mentor era muy criticada. De hecho, Fonseca Amador llamaba a una lucha armada interna mientras permanecía en Cuba, donde, por otra parte, los cubanos lo limitaban a un rol marginal y apoyaban poco o nada a los militantes del FSLN que vivían en la clandestinidad en Nicaragua. En contraste, los sandinistas instalados en Costa Rica podían contar con la complicidad benevolente del Presidente proveniente de las filas del partido liberacionista,¹² Daniel Oduber, elegido a inicios de 1974. Este último estaba decidido a retomar la vieja política del Partido de Liberación Nacional (PLN), de ayuda a los opositores de Somoza, política destacada a finales de la década de los cuarenta y en los cincuenta. Esta situación de conspiradores tolerada por el gobierno costarricense atrajo a los futuros terceristas, toda una serie de nuevos reclutas. Fueron primordialmente jóvenes provenientes de la clase media intelectual y

¹¹ Gabriel García Márquez relata estos hechos en *El asalto* (1983), mientras que Hugo Torres, quien participó en esta toma de rehenes, lo hace en *Rumbo Norte* (2003).

¹² Partido de Liberación Nacional, fundado por José Figueres tras su victoria en la breve guerra civil costarricense de 1948.

de buenas familias nicaragüenses. Todos estaban sensibilizados con la cuestión social, tanto por la renovación teológica de Medellín, como por la teología de la liberación, y sobre todo estaban escandalizados por la corrupción reinante en Nicaragua. Finalmente, estaban los veteranos de las operaciones armadas y de los complots maquinados desde el exilio en las décadas de 1940 y 1950.

Entonces, lo que subraya precisamente Moisés Hassan, es como el aumento de la fuerza de los sandinistas instalados en Costa Rica —los futuros terceristas— lleva a una secuencia de circunstancias junto con una internacionalización de los conflictos, en principio estrictamente circunscritos a Nicaragua. El primer cambio importante fue la llegada al poder de Jimmy Carter y el establecimiento de su nueva política de defensa de los derechos humanos. Lejos de ser mera retórica, su voluntad de defender y promover los derechos humanos se tradujo en un condicionamiento de la ayuda económica y militar al respeto de estos derechos. Y a partir de 1977, Somoza es obligado a poner fin al Estado de sitio que estaba en vigor desde 1975. Desde entonces, la UDEL, liderada por Pedro Joaquín Chamorro, creció en poder. Con el apoyo de la iglesia, así como del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y de su líder, Alfonso Robelo, comenzó a hacer admitir a todo un sector de los conservadores que sus pactos y sus acuerdos con el Partido Liberal Nacionalista de los Somoza ya no eran válidos. Al contrario, la influencia del FSLN permaneció reducida como resultado de sus disputas internas. Ya no había un FSLN, sino tres tendencias rivales que actuaban como auténticas entidades independientes, mucho más cuando Carlos Fonseca Amador regresó a Nicaragua para reafirmar su autoridad, y fue asesinado por la Guardia Nacional en noviembre de 1976. Si bien los terceristas instalados en Costa Rica lanzaron a finales de 1977 diversas operaciones militares que, pensaron, debían provocar levantamientos populares, estas resultaron ser un fiasco porque la población no se alió a sus tentativas de insurrección. Los llamados de los terceristas a una alianza de todos los grupos de oposición a Somoza, difundidos por un grupo de doce personalidades independientes, dirigido por el escritor Sergio Ramírez, no tuvieron en un inicio mayor éxito.

Fue necesario esperar al 10 de enero de 1978, día del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, crimen inmediatamente atribuido al entor-

no de Somoza, para que el COSEP y las fuerzas políticas que componen la UDEL, aceptaran hacer causa común con los terceristas. Todos comprendieron que si un personaje en apariencia tan intocable como Pedro Joaquín Chamorro había podido ser asesinado, entonces todos podían en adelante sentirse amenazados de la misma forma. Como lo cuenta muy bien Moisés Hassan, cualquiera que sea la importancia de los combates efectuados por los jóvenes insurgentes dirigidos por los sandinistas, los *muchachos*, o incluso la ferocidad de una represión que contribuyó a solidificar a la oposición y a impulsar a los jóvenes a tomar las armas, la victoria nunca hubiera sido posible sin el visto bueno de Jimmy Carter. Es, nos dice, su nueva política de los derechos humanos con relación a Nicaragua, después de su liberación de Somoza tras la votación por el Congreso de Estados Unidos de la restitución de la zona del canal de Panamá, lo que condujo al Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, al de México, José López Portillo y finalmente al de Panamá, Omar Torrijos, a romper con Somoza y apoyar a los terceristas de dos maneras. En primer lugar, proporcionándoles medios financieros y militares, especialmente luego de la toma de rehenes del Palacio Nacional por un comando tercerista (agosto de 1978). Por otra parte, convenciendo a la viuda de Pedro Joaquín Chamorro y a Alfonso Robelo, de participar en un gobierno provisional, junto a Sergio Ramírez, como representante del grupo de los doce y Moisés Hassan como responsable del Movimiento Pueblo Unido (MPU); dúo al que pronto se añadió en un hecho consumado, Daniel Ortega, impulsado por su hermano Humberto, quien era en aquel momento el principal líder de los terceristas.

Moisés Hassan aporta una tercera corrección importante a los relatos formulados sobre el momento de reunificación de las tres tendencias del FSLN en marzo de 1979. En la lucha que lo enfrentó a los dos líderes históricos del GPP, Henry Ruíz y Tomás Borges, Humberto Ortega tuvo la idea de volver a dar fuerza a los proletarios y a su líder, Jaime Wheelock, quien después de su expulsión del FSLN en 1975, prácticamente no tenía ningún peso político. El hecho fue incluso más fácil, porque Humberto Ortega estaba en una situación de fuerza, debido a los recursos militares, financieros y políticos que los terceristas habían adquirido en Costa Rica. De este modo, apareció como un reconciliador

magnánimo y no como alguien buscando imponerse de inmediato a sus rivales. Así, en una dirección colegiada de nueve miembros, tres por tendencia, los terceristas estaban *de facto* en una posición de alianza privilegiada con los proletarios que estaban obligados a ellos.

Moisés Hassan hace una última observación capital. Establece un paralelo entre la táctica insurreccional puesta en el centro de atención por los terceristas y aquella en vigor en el juego político y las guerras entre conservadores y liberales en el siglo XIX y XX, el *cuartelazo* (golpe de Estado). Las facciones políticas hacen alianza con las fuerzas armadas o con una parte de ellas, sea para derrocar al Presidente en turno o para llevarlo a negociar, en una lógica de confrontación y luego de acuerdo entre competidores rivales. Para los partidarios de estas modalidades de acción, la política es la obra de un pequeño número de personas “capaces”, instruidas y educadas que se ponen de acuerdo en el vértice e invitan al pueblo a ratificar sus elecciones por medio de las votaciones, que no tiene otro rol que afirmar la adhesión del pueblo a este acuerdo establecido, sin que éste tenga algo que decir. En este sentido, el juego de negociaciones entre los sandinistas y las otras fuerzas políticas anti-somocistas estuvo en línea directa con esta práctica. Todos buscaron antes que nada expulsar a Somoza y a sus pares del poder, para establecer otra fórmula de gobierno, en la que el conjunto de las fuerzas, otrora excluidas de los pactos entre Somoza y una parte de los conservadores, pudieran hacer valer sus objetivos. La cuestión del futuro régimen fue puesta entre paréntesis. Los sandinistas que habían moderado sus pretensiones, aplazando su proyecto de construir inmediatamente una sociedad socialista y aceptando una fase de transición —una Junta de gobierno de reconstrucción nacional—, se convirtieron en socios aceptables para esta política pactista. Moisés Hassan indica que, a pesar de la irrupción en la escena política de las clases populares durante las ocho semanas de los combates urbanos luego de la insurrección final, nada hubiera sido posible *in fine* sin el juego de acuerdos en el vértice de las élites nicaragüenses, los sandinistas, Estados Unidos y los diferentes países latinoamericanos. Por consiguiente, la revolución fue conforme al estilo tradicional de la política nicaragüense, demostración de fuerza, violencia y acuerdos en el vértice.

Ahora bien, cabe señalar que Moisés Hassan encuentra aquí un esquema de interpretación muy cercano al del “juego de los competidores por el poder” de Chales Anderson. Desde este punto de vista, la revolución sandinista se inscribe en la línea de esas costumbres. Somoza, en su voluntad de controlar él solo el juego político, tras el terremoto de 1972, como de apoderarse de todos los beneficios de la reconstrucción de la capital, aparece como una amenaza para sus antiguos aliados conservadores y para la burguesía empresarial. El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro fue el evento escandaloso que unió al conjunto de fuerzas políticas en su contra, y que al término de una lucha sangrienta contra su guardia pretoriana, instituyeron una nueva fórmula de gobierno basada, sobre todo en un juego de negociación y acuerdos entre las diferentes entidades en lucha contra Somoza, tanto en el plano nacional como internacional.

Anatomía de la revolución y del nuevo poder

Dos momentos del relato de Moisés Hassan de los inicios de la revolución abren el camino a una interpretación innovadora del tipo de poder que va a encarnar la nueva Dirección Nacional del FSLN. Lo que cuenta de las instrucciones dadas a los combatientes sandinistas en la víspera de la toma de Managua es, desde este punto de vista, ejemplar. Se les anunció que, contrariamente a sus expectativas, la Guardia Nacional no sería desmantelada, sino que el nuevo ejército nicaragüense integraría por partes iguales a los antiguos guardias nacionales y a los antiguos guerrilleros sandinistas. Moisés Hassan que entonces era uno de los dirigentes de la GPP, responsable de la insurrección en Managua, protestó inmediatamente en contra de esta decisión. Recordó el precedente funesto de la historia de Sandino, quien aceptó pactar con Somoza después del final de la guerra civil, y posteriormente fue asesinado a traición, al igual que muchos de sus partidarios y sus familias.¹³ Lo

¹³ De hecho, el problema no se planteó, ya que contrariamente a los acuerdos con-

que impactó durante la discusión no fue que sus compañeros de armas, originalmente de acuerdo con sus puntos de vista, se alinearán con las opiniones de la Dirección Nacional (DN). De entrada, toda la discusión fue irrelevante. Aquellos que habían demostrado cierta independencia de espíritu obedecieron inmediatamente sin protestar las instrucciones y permanecieron atónitos cuando él levantó la voz. Todo ocurrió como si una vez constituida la DN no hubiera otra posibilidad que asentir sin pestañar a sus consignas. Por último, su relato de la forma en que la JGRN decidió en abril de 1980, la ampliación del Consejo de Estado —el poder legislativo provisional donde los sandinistas no eran mayoría como lo eran al interior de la JGRN—, es también importante. Como lo relata Hassan, quien era entonces miembro de la Junta, realmente ésta quedó subordinada al poder de la DN, que fue a la vez un poder ejecutivo y legislativo, y también judicial, porque la Corte Suprema de Justicia no dio muestra de algún tipo de independencia.

Por lo tanto, a causa de las demandas de los grupos y sectores no sandinistas, especialmente los socialcristianos, algunos clanes conservadores o el Movimiento Democrático Nicaragüense de Alfonso Robelo, demandas apoyadas por Estados Unidos, pero también por Venezuela y Costa Rica, los sandinistas no pudieron aplazar más el establecimiento y la entrada en función del Consejo de Estado. Reunidos por Sergio Ramírez, mientras Daniel Ortega estaba en un viaje oficial en África, el resto de los miembros de la JGRN, Moisés Hassan, Alfonso Robelo y Violeta Chamorro, fueron asistidos por dos miembros de la DN con los que tuvieron que deliberar, Jaime Wheelock y Bayardo Arce. El debate comenzó por un intercambio de ideas entre Robelo y Ramírez. Al respecto, el primero apeló a los acuerdos celebrados en San José a inicios

certados tras la partida de Somoza, el Presidente interino Urcuyo, encargado de hacer el traspaso del poder entre la JGRN y Somoza, llamó a la Guardia a continuar con los combates. Privada de toda ayuda y sin municiones, la Guardia se desbandó y un buen número de sus miembros huyeron. Como resultado, los sandinistas pudieron inmediatamente constituir un ejército —el Ejército Popular Sandinista (EPS)— compuesto exclusivamente de hombres procedentes tanto de las filas de los insurgentes, como de los miembros del FSLN, y uno de los nueve miembros de la Dirección Nacional, Humberto Ortega, tomó inmediatamente el mando.

de 1979. Por el contrario, el segundo subrayó que otras fuerzas habían surgido durante los primeros ocho meses del proceso revolucionario, como los Comités de Defensa Sandinista, la juventud sandinista, la ATC y muchas otras, que eran en su totalidad organizaciones de masas subordinadas al FSLN. Por lo tanto, argumentó Sergio Ramírez, convenía dar lugar a esas catorce nuevas organizaciones dentro del Consejo que hasta entonces solo contaba con 33 miembros. De hecho, esta ampliación daba la mayoría al FSLN. Posteriormente se pasó a la votación. Alfonso Robelo y Violeta Chamorro manifestaron su voluntad de respetar los acuerdos pasados y no ampliar el Consejo. Ramírez y Wheelock, quien remplazaba a Ortega, votaron por la ampliación. Llegó el turno de Moisés Hassan que, llamado al orden por Sergio Ramírez, apoyó la posición oficial del FSLN. Algunos días después de este episodio, Violeta Chamorro abandonó su puesto en la JGRN, “por razones de salud”, mientras que Alfonso Robelo dimitió en señal de protesta.

Lo que Hassan destaca muy bien en estas anécdotas, es como el poder de los miembros de la DN fue absoluto al tiempo que estaba rodeado de ciertas apariencias democráticas. No se impuso de inmediato, se esperaba de los militantes del Frente, como de sus aliados dentro de la JGRN, que se plegaran a las decisiones que se les proponían y que las aprobaran. Así, la DN, que diseñó todos los nuevos poderes, quiso mantener ciertas apariencias pluralistas y liberales, tanto en los asuntos internos del FSLN, como en la conducción de los asuntos políticos ordinarios. Aquí, se tuvo la preocupación de engatusar a ciertos dirigentes político-militares tomados por sorpresa por la reunificación repentina de las tres tendencias del FSLN, y la creación de este nuevo órgano de gobierno. Se tuvo la misma voluntad de cuidar la susceptibilidad de los aliados del Frente, pero no se toleró más que los partidos rivales del FSLN mostraran su independencia o expusieran sus deseos a la ligera y, menos aún, que hicieran alguna demostración de fuerza antes de pactar. La DN tuvo el monopolio del uso de las manifestaciones y las concentraciones de masas. Cuando sus aliados rivales pretendieron hacer lo mismo, fueron acusados de actividades divisionistas o contrarrevolucionarias. Fueron considerados como amenazas para el nuevo orden social y se le acusó de actividades contrarrevolucionarias. De ahí, la consulta en la víspera de la insurrección, que cuenta Moisés Hassan. Del mismo

modo, se puede pensar que los sandinistas no quisieron enemistarse con los sectores no sandinistas que habían participado en la creación de la JGRN y del primer gobierno. Finalmente, se puede creer que algunos altos funcionarios estuvieron preocupados por guardar las formas, para no atraer abiertamente la hostilidad de los países que habían sostenido a los sandinistas en su combate contra Somoza, y que aparecían como los dos únicos regímenes realmente democráticos de América Latina, Venezuela y Costa Rica.¹⁴ Asimismo, se puede suponer que también tuvieron la sensatez de no desafiar abiertamente a los Estados Unidos de Jimmy Carter, cuyo embajador Laurence Pezullo abogaba sin descanso a favor de Nicaragua, y con éxito, pues Nicaragua recibió ayudas considerables de Estados Unidos.

La cuestión es a la vez verdadera y mucho menos clara de lo que parece. En el plano interno, los sandinistas no vacilaron en transgredir casi inmediatamente los acuerdos concertados con sus aliados rivales. Incluso, dieron consignas explícitas a sus dirigentes, especialmente durante una reunión a mediados de septiembre donde se presentó un documento que explicaba cómo construir metódicamente “la hegemonía sandinista”, aislando a los sectores de ultraizquierda y a los sectores burgueses.¹⁵ Se apoderaron de las instalaciones del periódico de Somoza, *Novedades*, para lanzar su propio diario, *Barricada*, cuando estas instalaciones deberían haber servido para el lanzamiento de un periódico oficial. De igual forma, transformaron inmediatamente los comités de base que surgieron durante la insurrección final en Comités de Defensa Sandinista (CDS), estrictamente subordinados al FSLN. Impusieron, desde diciembre de 1979, una reestructuración ministerial donde los ministros independientes de los sandinistas fueron reempla-

¹⁴ Recordemos que en esa época, los únicos dos países del subcontinente cuyos dirigentes eran elegidos como resultado de elecciones competitivas, desde hace varias legislaturas eran Costa Rica, después de la guerra civil de 1948, y Venezuela, después de 1958 tras el pacto de Punto Fijo. En otros lugares, el establecimiento de regímenes democráticos se encontraba en sus primeros pasos.

¹⁵ Conocido bajo el nombre de “Documento de las 72 horas”, este texto de orientación se distribuyó a los dirigentes presentes en esta reunión de los días 21, 22 y 23 de septiembre de 1979.

zados por dirigentes del FSNL, por algunos miembros de la DN o por hombres de confianza. En el plano internacional, los sandinistas y la JGRN a través de Ortega y de su ministro de relaciones exteriores, Miguel d'Escoto, optaron rápidamente por la alineación con el bloque soviético y con Cuba. Así, en marzo de 1980, se negaron a condenar la intervención soviética en Afganistán, así como publicaron una declaración afirmando su unidad de propósito y su solidaridad con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Igualmente, los sandinistas apoyaron firmemente a los guerrilleros salvadoreños del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en sus tentativas de derrocar a la junta que había tomado el poder en octubre de 1979, y sobre la cual Jimmy Carter estaba apostando para proceder a las reformas profundas de este país. Mejor aún, difícilmente se escondieron por haber transformado su país en la retaguardia para los guerrilleros salvadoreños, exactamente como Costa Rica lo había hecho a su beneficio dos años antes. Finalmente, los dirigentes sandinistas no cesaron de proclamar en *Barricada* y en sus discursos, en la radio o la televisión, que el enfrentamiento con el imperialismo americano era inevitable (Christian, 1985; Ramírez, 1999).

Lo que nos ayuda a comprender Moisés Hassan, es que este sentido de la consulta de las bases o de los aliados del Frente dan cuenta de la preocupación de poner en escena un nuevo modo de funcionamiento del poder. Nada representa mejor a la DN que el eslogan “DN ordena”, que acompañó a sus múltiples apariciones públicas desde finales de 1979, se concibió como un poder que a la vez fuera superior de la sociedad, pero también la encarnación del pueblo; y que finalmente pusiera en acto el hecho de que sus decisiones no solamente respondían a las demandas populares, sino que además eran, por ello, regularmente aprobadas. Los responsables de la insurrección en Managua fueron obligados a aprobar la elección de la DN y una vez que ésta había adoptado un curso de acción, no hubo otra posibilidad que obedecer. Más aún, no fue cuestión de hacerlo a medias y mucho menos de hacer críticas públicas. Lo mismo ocurrió con la decisión de la ampliación del Consejo de Estado. Moisés Hassan, Violeta Chamorro y Alfonso Robelo fueron puestos ante el hecho consumado e invitados a unirse a la propuesta, que vino de la DN, de la que Moisés Hassan no formó

parte, pero de la que Sergio Ramírez era representante en ausencia de Ortega. Los acuerdos pactados en el pasado fueron cuestionados debido a las nuevas relaciones de fuerza, nunca fueron considerados como un contrato previo que las partes contratantes tenían que respetar durante un plazo determinado.

Moisés Hassan da otros ejemplos igualmente reveladores de este modo de funcionamiento de la DN. Así, cuando implementó una Asamblea sandinista, formada por un centenar de directivos, no pretendía en modo alguno sentar las bases de un contrapoder destinado a debatir o a modificar sus proyectos o sus directrices. El objetivo fue crear un lugar propicio para la realización de dos imperativos esenciales para el buen funcionamiento de ese nuevo poder. Se creó, más allá de las antiguas divisiones en tendencias, una correa de transmisión de las consignas de la DN, que luego fueron remitidas directamente a los dirigentes de rango inferior y a los militantes de base. Se creó una instancia donde la élite de los directivos del Frente interiorizó y valoró esta omnisciencia de la DN. Su relato de algunas reuniones de la Asamblea sandinista es también ejemplar. Invitados a examinar un documento pronunciándose sobre las políticas relativas a los diferentes sectores sociales, obreros, pequeños productores agrícolas, pequeños comerciantes, técnicos, directivos y burguesía, los miembros de la Asamblea fueron divididos en diferentes comisiones. Cada una tuvo a su cargo examinar la política adoptada por la DN con relación a cada uno de estos sectores. Durante el examen de los documentos, los miembros de la DN circularon de grupo en grupo para orientar la reflexión y con ello impedir toda reflexión autónoma. Y todo aquel que dio muestras de independencia de juicio o se atrevió a proponer medidas, que modificaban aunque fuera un poco las directivas adoptadas por los miembros de la DN, era puesto rápidamente, y si era necesario brutalmente, en su lugar. Como lo subraya Hassan, estas reuniones fueron una farsa amarga para los escasos participantes que tenían un poco de independencia o de orgullo. Al contrario, para el resto fueron una oportunidad para destacarse y proclamar públicamente su fe y lealtad hacia los dirigentes. Más aún, algunos que comprendieron que sus tomas de posición en los debates de las comisiones habían podido ir en contra de las directivas de la DN, se superaron en el arte de desdecirse públicamente y de hacer acto de arrepentimiento.

Esta sacralización del poder de los miembros de la Dirección Nacional no fue solo obra de los directivos del Frente, que para muchos eran intelectuales nicaragüenses de renombre —piénsese en escritores como Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez o Gioconda Belli, o incluso en economistas reconocidos. A inicios de la década de 1980, toda una serie de intelectuales latinoamericanos y europeos, particularmente hombres de letras —Mario Benedetti, Julio Cortázar, Régis Debray, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano, Graham Greene y Günter Grass— dejaron testimonio de su admiración por la revolución y su núcleo dirigente. Como señala acertadamente Hassan, todos se dirigieron a Nicaragua, no para comprender una experiencia revolucionaria y, por tanto, apoyarla con conocimiento de causa, sino para adorarla de manera ciega. Y sus elogios, ampliamente reflejados en la prensa sandinista, pesaron en la implementación de un credo, haciendo de la Dirección Nacional un órgano dirigente con competencias universales. Esta sacralización de la DN y la abdicación de todo sentido crítico, condujeron más de una vez a decisiones políticas o económicas catastróficas, tanto en materia de política exterior como en materia de política económica. Moisés Hassan subraya hasta qué punto las elecciones de Jaime Wheelock, el todo poderoso ministro de agricultura, fueron desde este punto de vista, particularmente perjudiciales debido al peso de la agricultura en la economía nicaragüense. No se escuchó más a los directivos y a los técnicos que se opusieron a ciertas opciones aberrantes en materia de cultivo o ganadería. Se prefirieron a los técnicos que abandonaban toda independencia de juicio, a condición de que estuvieran alineados. La productividad de toda una serie de áreas confiscadas bajó dramáticamente, mientras que la política de la sospecha y a menudo la de persecución de pequeños productores independientes, impulsó a algunos a tomar las armas y a constituir los primeros núcleos de la *Contra*. Y cuando los directivos del Frente, y si era necesario miembros de la Asamblea sandinista como Moisés Hassan, se atrevieron a decir en voz alta cuales eran los callejones sin salida de esa política, fueron convocados por los altos dirigentes del FSLN y sermoneados en buena y debida forma. La consecuencia de esta ceguera organizada fue el creciente apoyo de los campesinos a una *Contra* en adelante apoyada materialmente por Estados Unidos

desde 1982, y por consiguiente, mucho más peligrosa militarmente hablando.¹⁶

Otra deriva de este culto a la omnipotencia de la DN y a la imposibilidad de ponerla en entredicho, fue el mercantilismo descarado de ciertos asesores económicos del nuevo Estado revolucionario, en ocasiones en complicidad directa con algunos miembros de la Dirección Nacional. Nicaragua tuvo que adquirir en los mercados internacionales toda una serie de productos indispensables para el funcionamiento de su economía y de su administración. Bajo pretexto de asegurarse los servicios de los intermediarios más hábiles, los miembros de la DN se pusieron en connivencia con empresarios de dudosa reputación, que facturaron sus servicios a tarifas exorbitantes, debido a las llamadas comisiones destinadas a los intermediarios que, dijeron, podrían bajar los precios en beneficio de Nicaragua. Así, el ministro del interior, Tomás Borge, creó una sociedad encargada de importar a Nicaragua toda una serie de equipos necesarios para su ministerio, aparatos de aire acondicionado, computadoras, muebles de oficina. Con el pretexto de ahorrar, esta sociedad facturó todas las mercancías importadas ¡dos y cuatro veces más arriba de sus precios habituales! La anarquía burocrática, ya ruinosa, estuvo acompañada por todo un sistema de prebendas. Y el relato que hace Moisés Hassan de la tranquilidad y la desvergüenza con la cual Tomás Borge practicó este bandolerismo deja atónito.

¹⁶ La *Contra* fue formada originalmente por grupos perfectamente heterogéneos: desde los antiguos guardias nacionales de Somoza, la Legión 15 de septiembre, que comenzó a operar desde 1980; los campesinos que anteriormente habían apoyado al FSLN, hasta los miembros de las *Milicias populares anti sandinistas*, que se quedaron rápidamente desilusionados por su política agraria de chocar palmas y se lanzaron desde 1980 esperando influir en la política del FSLN; los indígenas de la costa atlántica nicaragüense, miembros del movimiento indígena MISURASATA, al inicio aliados al FSLN que entraron en oposición con él a partir de 1981; y por último, los sandinistas vinculados a Edén Pastora, quienes criticaron desde 1981 el recorrido tomado por la revolución. A finales de 1981 y principios de 1982, estos grupos comenzaron a recibir una ayuda logística y militar de las fuerzas armadas hondureñas, guatemaltecas, argentinas y de Estados Unidos. Sobre este punto me remito a tres estudios que dediqué a los *Contras*, disponibles en línea, que contienen numerosas referencias bibliográficas (Bataillon, 1993, 2001 y 2002), así como a la obra de Brown (2001).

La DN no fue solamente un poder acrítico con competencias múltiples, fue también la cabeza de proa de un nuevo cuerpo burocrático constituido por los miembros de las nuevas administraciones, de directivos del partido-Estado y de sus organizaciones de masas. Tuvo desde entonces el privilegio de decidir el modelo de recompensa y retribución de este nuevo cuerpo. Si en principio, reinó un ambiente de igualitarismo y de una cierta austeridad marcial, rápidamente, y con algunas raras excepciones como Henry Ruíz, las cosas tomaron un giro completamente diferente. Sin duda, uno de los primeros decretos de la Junta fue regular el uso de las casas y residencias de lujo, tanto en las zonas urbanas, como rurales o litorales, pertenecientes a Somoza y a sus partidarios, expropiadas desde el 20 de julio. Según este decreto, las casas debían ser utilizadas prioritariamente por los Ministerios de Asuntos Sociales, de la Salud y de la Educación. Asimismo, podían convertirse en sede de las nuevas organizaciones políticas, o ser utilizadas como residencia de protocolo para alojar a los invitados del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero en ningún caso, el texto fue explícito, no podían ser atribuidas a los dirigentes políticos del nuevo poder. En contradicción con todos estos dispositivos legales, los nuevos dirigentes políticos se abalanzaron sobre estos bienes vacantes y se apoderaron de ellos. No fueron solamente los hermanos de Ortega o Tomás Borge quienes se adjudicaron las casas más bellas y, en su caso, como este último, realizaron suntuosas obras en ellas. Fue toda una serie de nuevos dirigentes políticos que, en todos los niveles jerárquicos del nuevo poder, se instalaron en estas casas, y ya no las abandonaron. Se apoderaron en nombre de estos mismos imperativos de todo un extenso lote de autos, también confiscado e inicialmente destinado para ser revendido en Panamá. Como señala Moisés Hassan, la ilegalidad de estas prácticas fue perfectamente funcional, ya que permitió a la parte superior de la pirámide burocrática tener el mando sobre los subordinados. Estas transferencias de propiedades —autos o casas— fueron transferencias de hecho y no de derecho. Así que pudieron ser cuestionadas en cualquier momento. Cualquiera que no demostraba una lealtad incondicional hacia los dirigentes, era relevado de sus funciones, y obligado a devolver los bienes de los que disponía hasta ese momento. Por lo tanto, cuando Moisés Hassan en 1985 presentó su renuncia al cargo de Viceministro del Inte-

rior, fue invitado por Tomás Borge, su ministro de tutela, a abandonar su casa y automóvil. Y la sorpresa de Borge fue total, cuando Moisés Hassan le respondió que no devolvería nada, porque era propietario de su casa y de su automóvil, ambas cosas compradas antes del 19 de julio de 1979.

Esta capacidad de los nuevos dirigentes para recompensar a sus fieles y asegurarse su lealtad garantizándoles diferentes ventajas materiales, se duplicó en su propensión a utilizar la violencia en contra de aquellos considerados como sus opositores, ya sean antiguos aliados en la lucha contra Somoza, los miembros del FSLN que demostraban indisciplina o, más aún, los miembros del FSLN en ruptura con el partido. Es emblemático de estas prácticas lo que narra Moisés Hassan, cuando habla de la suerte que corrió Robelo tras su dimisión de la JGRN. Robelo fue estigmatizado públicamente, convertido en un enemigo de la revolución y un representante del somocismo, tanto en tribunas oficiales por Sergio Ramírez y Luis Carrión, como durante las manifestaciones que congregaron los partidarios del Frente afuera de su domicilio. En paralelo, se comenzó a nacionalizar una de sus empresas de forma totalmente ilegal. Hassan recuerda como en noviembre de 1980, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Jorge Salazar, un cafetalero muy popular, tanto en el departamento de Matagalpa, de donde era originario, como dentro del COSEP, fue fríamente asesinado por la Seguridad del Estado (DGSE). Convertido en uno de los jefes de la oposición al Frente, fue llevado a una emboscada por los agentes de la DGSE. Estos lo invitaron a convertirse en parte de una supuesta conspiración de militares sandinistas decepcionados por el giro tomado por la revolución. Invitado a una reunión de conspiradores en las afueras de Managua, Salazar fue entonces abatido por los hombres de la DGSE. El hecho señalado por Moisés Hassan no fue ningún error, al contrario, fue un acto de intimidación en contra de todos aquellos que pretendían cuestionar la omnipotencia del FSLN y, sobre todo, que intentaban organizar la oposición. Por cierto, él mismo pagó el precio de esta utilización de la violencia fuera de toda legalidad en contra de los opositores en dos ocasiones. La primera vez, la violencia de la DGSE tomó la forma de una conspiración un poco a la imagen de la emboscada tendida a Jorge Salazar. En 1983, uno de los amigos de Moisés

Hassan, miembro de la DGSE infiltrado en la casa de Edén Pastora, el antiguo jefe de la guerrilla sandinista exiliado en Costa Rica, recibió de este último una carta invitándolo a unirse a él para participar en el derrocamiento de los sandinistas. Rindiendo cuentas a Tomás Borge en su rol de mensajero, su amigo recibió la orden de entregar la carta a Moisés Hassan, para ponerlo a prueba, y ver cuál era su lealtad. Advertido de la maniobra por su amigo y a pesar de sus diferencias con la DN y particularmente con Borge, Hassan supo entregar inmediatamente la citada carta a este último y no contentarse solo con rechazar la oferta de Pastora. El caso terminó ahí. Algunos años más tarde, tras su abandono de toda función oficial, después de los acuerdos de paz con la *Contra*, su esposa y sus hijas fueron objeto de repetidas amenazas telefónicas de violaciones y asesinatos. A estas amenazas sucedieron pronto tres tentativas de sabotaje de su automóvil, que por suerte no provocaron un accidente mortal.

Si bien Moisés Hassan pone en el centro de su análisis del proceso revolucionario nicaragüense, el rol *sine qua non* del Frente sandinista y de su Dirección Nacional, en la institución de un nuevo régimen político, también subraya como el surgimiento de ese nuevo régimen habría sido imposible sin su capacidad de unir a toda una parte de los sectores populares debido a sus políticas económicas. Así, el Frente supo encontrar apoyos en los sectores populares asalariados de la recién creada Área de la Propiedad del Pueblo (APP) como resultado de una política social generosa, un aumento de los salarios y una baja en el número de horas trabajadas, pero catastrófica a mediano y largo plazo, luego de que estas se tradujeron en el abandono de toda exigencia de productividad en este nuevo sector económico.¹⁷ Igualmente, encontró a sus aliados entre los intelectuales y entre algunos empresarios que estuvieron deseosos por beneficiarse de la posibilidad, tanto de hacer negocios con el nuevo régimen, como de colonizar el nuevo aparato del Estado y el sistema de prebendas que se creó a su sombra. El surgimiento del poder de los sandinistas efectivamente tuvo lugar en un

¹⁷ Las observaciones de Moisés Hassan en la materia son aproximadas a aquellas de Dumont (1983) y Biondi-Morra (1990).

país donde toda una parte de la población tenía sed de movilidad social y veía en el sandinismo una oportunidad para mejorar esa posición. La burocratización desde arriba se duplicó con la burocratización desde abajo. Miles de personas provenientes de los sectores populares accedieron a puestos de responsabilidad dentro de las organizaciones de masas del Frente o dentro de las nuevas estructuras del Estado, debido no a un saber técnico o profesional, sino en razón de su demostración de lealtad a las autoridades sandinistas. Además, muchos de estos nuevos personajes promovidos fueron con frecuencia sandinistas de última hora, que a menudo habían participado poco o nada en la lucha contra Somoza y a veces, incluso, eran antiguos somocistas deseosos de rehabilitarse y que, por lo tanto, demostraron la más absoluta fidelidad a las nuevas autoridades.

Sin emplear nunca ni la palabra, ni el adjetivo “totalitario”, el análisis que hace Moisés Hassan del régimen político proveniente de la revolución nicaragüense de julio de 1979 coincide en muchos aspectos con los grandes análisis del totalitarismo, especialmente con los de Lefort (1999) y Ferro (1997). La revolución totalitaria no solo está impulsada por un proyecto ideológico, sino por una nueva clase, la burocracia proveniente de un partido revolucionario, cuyas filas crecen a lo largo de la experiencia revolucionaria. Hay una doble burocratización: desde arriba, en la lucha de los dirigentes del partido revolucionario contra las otras fuerzas políticas y sociales; desde abajo, en la multiplicación de los nuevos órganos de poder vinculados al nuevo partido-Estado, organizaciones de masas, sindicatos, movimientos de jóvenes o mujeres, y la voluntad de los responsables de estos nuevos órganos de ver perpetuarse sus funciones. Finalmente, esta aparición de un partido-Estado con dirigentes todopoderosos se apoya sobre las costumbres no democráticas, que son compartidas por la gran mayoría de los actores sociopolíticos y de ningún modo prerrogativa de los miembros del partido revolucionario que buscan tomar el control.

Se puede comprender el libro de Moisés Hassan retomando la tradición del ensayo político. Un actor se hace escritor para describir e interpretar su itinerario político y el de su país. En este sentido, pasa del registro de memorialista al de historiador, de sociólogo y/o de moralista. Es poco decir que ese enfoque para nosotros se ha vuelto inusual, en un

mundo donde los conocimientos universitarios se han especializado en exceso y en el que el ensayo ha decaído, a menudo, por las facilidades que se han concedido. El discurso de Moisés Hassan chocará doblemente con las ideas preconcebidas. Escandalizará a los antiguos compañeros de camino de la revolución sandinista, deseosos de reprimir un pasado que tanto adoraron sin quererlo nunca pensar. No será menos inaudible para todos aquellos que le fueron hostiles en nombre de un anticomunismo que valoraba ciegamente a los Estados Unidos de Reagan, y que en el fondo no tenía nada que ver con Nicaragua. El punto central de este ensayo es justamente una manera de escribir sin tener preocupación por los dogmas políticos o científicos. Está escrito sin vendas en los ojos para las personas preocupadas por la libertad.

Bibliografía

- Alaniz, J. (1985). *Nicaragua una revolución reaccionaria*. Argentina, México, Panamá: Kosmos.
- Anderson, C. (1967). *Politics and Economic Change in Latin America: The Governing of Restless Nations*. Princeton: D. Van Nostrand Company.
- Anderson, C. (1964). Nicaragua, the Somoza Dynasty. En M. Needler (ed.). *Political Systems in Latin America* (pp. 91-111). Princeton: D. Van Nostrand Company.
- Banfield, E. (1958). *The Moral Basis of Backward Society*. Nueva York: The Free Press.
- Bataillon, G. (2010). Nicaragua, hacia una dictadura personal. *Letras Libres*, (135), 55-56.
- Bataillon, G. (2008). Chasse aux sorcières à Managua. *Esprit*, (349), 199-204.
- Bataillon, G. (2002). Guerre et assemblée, découverte et apprentissage de la démocratie chez les Miskitus nicaraguayens (1981-1988). *Cultures et Conflits*, (47), 195-215.
- Bataillon, G. (2001). Comandantes, état-major et guérilleros: jeux de pouvoirs à l'intérieur de la guérilla miskitu (Nicaragua 1981-1984). *Cahiers des Amériques latines*, (36), 127-160.
- Bataillon, G. (1998). Nicaragua: la présidence Chamorro. L'instauration d'un régime démocratique désenchanté. *Problèmes d'Amérique latine*, (30), 71-92.

- Bataillon, G. (1993). *Contras et Recontras Nicaraguayens (1982-1993): Réflexions sur l'action armée et la constitution d'acteurs politico-militaires. Cultures et Conflits*, (12).
- Belli, G. (2003). *El país bajo mi piel*. Nueva York: Vintage Español.
- Biondi-Morra, B. (1990). *Revolución y política alimentaria. Un análisis crítico de Nicaragua*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Brown, T. (2001). *The Real Contra War. Highlander Peasant Resistance in Nicaragua*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Cardenal, E. (2003). *Memorias II. Las ínsulas extrañas*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Caroit, M. y Soulé, V. (1981). *Nicaragua. Le modèle sandiniste*. París: Le Sycomore.
- Chamorro, C. (2009). "Le pouvoir citoyen" d'Ortega au Nicaragua, démocratie participative ou populisme autoritaire? *Problèmes d'Amérique latine*, (71), 89-99.
- Christian, S. (1985). *Nicaragua: Revolution in the Family*. Nueva York: Random House.
- Cruz, A. (2010). *Crónica de un disidente*. Managua: Lea Grupo.
- Cruz, A. J. (1989). *Memoirs of a Counter-Revolutionary. Life With the Contras, the Sandinistas, and the CIA*. Nueva York: Doubleday.
- Cruz, A. J. y P. Velásquez (1986). *Nicaragua: regresión en la revolución*. Costa Rica: Libro Libre.
- Dumont, R. (1983). *Finis les lendemains qui chantent... Albanie, Pologne, Nicaragua*. París: Le Seuil.
- Equipo Envío (2016). Entrevista a José Antonio Esparza. "Esta vez hicieron el fraude perfecto". *Envío*, (416). Recuperado de: <https://www.envio.org.ni/articulo/5272>
- Equipo Envío (2011). Elecciones 2011: Perdió Nicaragua. *Envío*, (356). Recuperado de: <https://www.envio.org.ni/articulo/4442>.
- Equipo Nítlápán-Envío (2006). Daniel Ortega Presidente: del poder "desde abajo" al gobierno. *Envío*, (296). Recuperado de: <https://www.envio.org.ni/articulo/3418>.
- Equipo Nítlápán-Envío (1999). Nicaragua: pacto: frutos amargos y hondas raíces. *Envío*, (208). Recuperado de: <http://www.envio.org.ni/articulo/948>.
- Ferro, M. (1997). *La Révolution de 1917*. París: Albin Michel.

- Frente Sandinista de Liberación Nacional (1979). *Análisis de la coyuntura y tareas de la revolución popular sandinista*. Recuperado de: <http://www.mediafire.com/?gm3tymcnuuu>.
- García, G. (1983). *El asalto*. Managua: Editorial Nueva Nicaragua.
- Gould, J. (1992). *To Leads as Equals*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Lacombe, D. (2009). El caso de Zoilamerica Narváez contra Daniel Ortega o la caducidad del hombre nuevo. *Problèmes d'Amérique latine*, (73), 73-100.
- Lefort, C. (1999). *La complication. Retour sur le communisme*. París: Fayard.
- Lefort, C. (1981). *L'invention démocratique*. París: Fayard.
- Martucelli, D. (2010). ¿Existen individuos en el sur? Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Morales, A. (1986). *Con el corazón en el disparador*. Managua: Editorial Vanguardia.
- Oberschall, A. (1973). *Social Conflict and Social Movements*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Peraza, J. (2016). Esta vez hicieron el fraude perfecto. *Envío*, (416). Recuperado de: <https://www.envio.org.ni/articulo/5272>.
- Ramírez, S. (2011). *Il pleut sur Managua*. París: Métailié Noir.
- Ramírez, S. (1999). *Adiós muchachos. Una memoria de la revolución sandinista*. Ciudad de México: Aguilar Taurus.
- Rocha, J. (2016). El proyecto Ortega-Murillo: cuatro claves de un éxito volátil. *Envío*, (416). Recuperado de: <https://www.envio.org.ni/articulo/5274>.
- Stone, S. (2001). *Telltale Stories from Central America. Cultural Heritage, Political Systems and Resistance in Developing Countries*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Téllez, D. (2009). Le gouvernement a polarisé le pays et la crise économique rend un dialogue national urgent. *Problèmes d'Amérique latine*, (73), 101-114.
- Torres, H. (2003). *Rumbo norte: historia de un sobreviviente*. Nicaragua: Editorial Hispamer.
- Velásquez, J. (1986). *Nicaragua. Sociedad civil y dictadura*. Costa Rica: Libro Libre.
- Vilas, C. (1987). *La revolución sandinista*. Madrid, Buenos Aires, México: Editorial Legasa.

Gilles Bataillon

Walker, T. (ed.) (1985). *Nicaragua: The First Five Years*. Nueva York: Praeger.

Walker, T. (1982). *Nicaragua in Revolution*. Nueva York: Praeger.

Weber, H. (1981). *Nicaragua. La révolution sandiniste*. París: François Maspéro.

Zavala, X. (ed.), (1984). *Nicaragua 1984*. Costa Rica: Libro Libre.

Recibido: 10 de junio de 2020

Aceptado: 25 de noviembre de 2021